

Excma. Sra. Consejera  
Consejería de Salud y Políticas Sociales  
Comunidad Autónoma de La Rioja  
C/ Bretón de los Herreros, 33  
26001 LOGROÑO  
LA RIOJA

Nº Expediente: 25015568  
Trámite: Inicio de actuación  
Asunto: Vía de impugnación establecida en procedimientos de renta de ciudadanía  
Promueve: El Defensor del Pueblo

Excma. Sra. Consejera:

Esta institución se pone en contacto con esa consejería con el fin de solicitar información sobre las vías de impugnación establecidas en los procedimientos de renta de ciudadanía, tras la modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

### Consideraciones

La Disposición final novena de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, modificó la letra o) del artículo 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, quedando redactado como sigue:

«o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección por desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones de protección social que establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para la cobertura de las necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social de las personas beneficiarias. Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.»

Por tanto, tras la referida modificación, se atribuyen a la jurisdicción social los litigios en materia de las prestaciones de protección social que establezcan las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para la

cobertura de las necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social de las personas beneficiarias.

Al unificar en el orden social los asuntos relativos a la impugnación de las actuaciones administrativas contempladas en el artículo 2 de la Ley 36/2011, para poder demandar a las administraciones públicas, el artículo 69 establece la necesidad de agotar la vía administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable. Sin embargo, el artículo 71 de la norma, con carácter general y en materia de prestaciones de Seguridad Social, con las excepciones que cita, establece que, para formular demanda en materia de prestaciones de Seguridad Social, es necesario que los interesados interpongan reclamación previa.

La atribución al orden social de los litigios relacionados con las rentas mínimas autonómicas, se ha realizado equiparando estas a todos los efectos de la ley a las prestaciones y a los beneficiarios de la Seguridad Social, tal y como lo señala expresamente el artículo 2 o) de la ley.

El régimen de impugnación en vía administrativa de los actos y de las resoluciones, previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, (artículos 112 a 126), no resulta aplicable en materia de prestaciones de la Seguridad Social y, en consecuencia, tampoco a los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de rentas mínimas autonómicas, en virtud de lo establecido en el artículo 2 o) y 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre. Contra estos actos y resoluciones procede la interposición de reclamación previa, al estar equiparados ambos sistemas de protección social, a todos los efectos de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, a las prestaciones y beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social.

Ello hace necesario que se proceda a la modificación de la normativa autonómica afectada y que, en las resoluciones que se dicten en materia de renta de ciudadanía, se indique que la vía administrativa de impugnación es la formulación de una reclamación previa y que la vía judicial procedente es la jurisdicción social.

Debe tenerse en consideración que la exigencia del artículo 9.3 de la Constitución española, que garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, implica que las disposiciones legales aplicables a una materia deben ser claras y no confusas y deben producir certeza, respecto al derecho aplicable y las vías de impugnación, a fin de garantizar la efectividad del derecho de las personas interesadas en el procedimiento a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Habida cuenta del tiempo transcurrido desde la modificación del artículo 2 de la Ley 36/2011, interesa a esta institución conocer las medidas que se han adoptado en esa comunidad autónoma respecto a las vías de impugnación contempladas en la normativa reguladora de la renta de ciudadanía, y si se ha incluido en el pie de las resoluciones dictadas la reclamación previa como

vía de impugnación, y la jurisdicción social como la competente para resolver los litigios correspondientes.

### Decisión

Al amparo de lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo se inicia esta actuación de oficio y se solicita que remita información sobre las cuestiones planteadas.

Le saluda muy atentamente,



Ángel Gabilondo Pujol  
Defensor del Pueblo